II. EXPEDIENTE D-11747 - SENTENCIA C-009/18 (Marzo 7)
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

1. Norma acusada

LEY 1801 DE 2016

(julio 29)

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

Artículo 53. Ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública y pacífica en el espacio público. Toda persona puede reunirse y manifestarse en sitio público con el fin de exponer ideas e intereses colectivos de carácter cultural, político, económico, religioso, social **o de cualquier otro fin legítimo.**

Con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico. Tal comunicación o correo debe ser suscrito por lo menos por tres personas.

Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión y se presentará con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.

Toda reunión y manifestación que cause **alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta.**

Parágrafo 1º. Las reuniones y manifestaciones espontáneas de una parte de la población no se considerarán por sí mismas como alteraciones a la convivencia.

Parágrafo 2º. El que irrespete las manifestaciones y reuniones de las personas en el espacio público, en razón a su etnia, raza, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias políticas y apariencia personal, será objeto de aplicación de medida correctiva correspondiente a Multa General Tipo 4.

Artículo 54. Uso de vías para el ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pacífica en el espacio público. Los alcaldes distritales o municipales, **salvo circunstancias**

excepcionales o de fuerza mayor, deberán autorizar el uso temporal de vías dentro de su jurisdicción para actos o eventos de ejercicio del derecho de reunión o manifestación pública y pacífica en el espacio público. En el caso de las vías arterias principales o corredores de transporte público colectivo deberán establecer un plan efectivo de desvíos para la movilización de los ciudadanos que no participan del acto o evento, como medida de protección de los derechos de los demás ciudadanos.

Artículo 55. Protección del ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública frente a señalamientos infundados. Con el fin de amparar el ejercicio del derecho a la reunión o movilización pacífica, queda prohibido divulgar mensajes engañosos en torno a quienes convocan o participan en las manifestaciones, así como hacer públicamente señalamientos falsos de la relación de los manifestantes con grupos armados al margen de la ley o deslegitimar por cualquier medio el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación pública y pacífica.

Artículo 56. Actuación de la Fuerza Pública en las movilizaciones terrestres. De conformidad con los estándares internacionales, es función de la Policía garantizar los derechos de toda la ciudadanía que interviene directa o indirectamente en el ejercicio de la movilización. El uso de la fuerza debe ser considerado siempre el último recurso en la intervención de las movilizaciones.

La actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identificados de tal manera que dicha identificación resulte visible sin dificultades. La fuerza disponible deberá estar ubicada de manera que su actuación pueda hacerse de forma oportuna, pero sin afectar el desarrollo de la movilización que se haga de conformidad con las normas de convivencia.

Los cuerpos de Policía intervendrán sólo cuando se considere que su actuación es necesaria, atendiendo al principio de proporcionalidad y a la garantía de los derechos de los manifestantes y de los demás habitantes que puedan verse afectados por su actuación. Los escuadrones móviles antimotines sólo serán enviados cuando no sea posible por otro medio controlar graves e inminentes amenazas a los derechos.

Las Fuerzas Militares no podrán intervenir en el desarrollo de operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales terrestres, salvo los casos en los que excepcionalmente los autoriza la Constitución y la ley.

Artículo 57. Acompañamiento a las movilizaciones. Los alcaldes distritales o municipales con el apoyo de funcionarios de los entes de control encargados de velar por la protección de los Derechos Humanos, acompañarán el ejercicio del derecho a la movilización pacífica. Cuando se presenten amenazas graves e inminentes a otros derechos, los alcaldes podrán intervenir, por medio de gestores de convivencia de naturaleza civil, para garantizar el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía durante el desarrollo de la movilización.

Cuando se haya agotado la intervención de los gestores de convivencia y persistan graves amenazas para los derechos a la vida y la integridad, la Policía Nacional podrá intervenir”.

2. Decisión

Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos ordenada por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 305 del 21 de junio de 2017.

Segundo.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-223 de 2017 que declaró inexequibles los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016 con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2019, por la vulneración a la reserva de ley estatutaria.

Tercero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-281 de 2017 que declaró exequible el inciso cuarto del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016, que establece: *"toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta"*, en el entendido de que *"(i) la alteración deberá ser grave e inminente y (ii) no exista otro medio menos gravoso para el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica"*.

Cuarto.- Declarar **EXEQUIBLE** la expresión *"cualquier otro fin legítimo"* contenida en el artículo 53 de la Ley 1801 de 2016, por el cargo analizado, en el entendido de que no es un fin legítimo: *(i) la propaganda de la guerra; (ii) la apología al odio, a la violencia y el delito; (iii) la pornografía infantil; (iv) la instigación pública y directa a cometer delitos; y (v) lo que el Legislador señale de manera expresa.*

Quinto.- Declarar **EXEQUIBLE**, por el cargo analizado, la expresión "*con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico*" contenida en el inciso segundo del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016.

Sexto.- Declarar **EXEQUIBLE**, por el cargo analizado, la expresión "*salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor*" contenida en el artículo 54 de la Ley 1801 de 2016, en el entendido de que la no autorización debe motivarse y hacer explícitas las razones que la fundamentan.

3. Síntesis de los fundamentos

En primer lugar, la Corte determinó que existía cosa juzgada constitucional respecto a la sentencia C-223 de 2017, por el cargo de reserva de ley estatutaria, pues esa providencia declaró la inexecutable de los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley 1801 de 2016, por ese mismo motivo. Sin embargo, los efectos de dicha decisión se difirieron en el tiempo por dos legislaturas, hasta que el Congreso profiriera una ley estatutaria que regule este asunto, por lo cual consideró procedente analizar los cargos de fondo.

En segundo término, estableció que no existía cosa juzgada respecto del inciso 2º (parcial) del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016 en relación con lo decidido en la sentencia C-024 de 1994. Lo anterior, pues aun cuando en ambos casos se alegó la violación del artículo 37 de la Constitución, se trata de cargos diferentes que no fueron abordados en esa providencia. Tercero, sostuvo que existe cosa juzgada respecto del inciso 4º del artículo 53 de la Ley 1801 de 2016 de conformidad con lo decidido en la Sentencia C-281 de 2017.

Luego de delimitar los cargos subsistentes la Corte concluyó que la expresión "*o de cualquier otro fin legítimo*" contenida en el artículo 53 de la Ley 1801 de 2016 no viola la Constitución al establecer una lista que incluye un concepto genérico sobre los discursos permitidos en el ejercicio de los derechos a la reunión y a la manifestación en el espacio público. Tal amplitud refleja la protección constitucional que parte de una autorización general para estos derechos y el de libertad de expresión. Sin embargo, consideró que también puede contener un grado de ambigüedad ilegítimo para la restricción del derecho. Por ello, condicionó su contenido en el entendido de que no es un fin legítimo: (i) la propaganda de la guerra; (ii) la apología al odio, a la violencia y el delito; (iii) la pornografía infantil; (iv) la instigación pública y directa a cometer delitos; y (v) lo que el Legislador señale de manera expresa.

Igualmente, determinó que la expresión "*con tales fines debe darse aviso por escrito presentado ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico*", contenida en el artículo 53 no viola los artículos 2º y 37 de la C.P, pues tal condición no aplica para las reuniones espontáneas y no es desproporcionado solicitar un aviso, no un permiso para que la administración adopte las medidas logísticas y administrativas necesarias con el objetivo de que se pueda realizar la reunión o manifestación, con la debida atención a los deberes del Estado de proteger el orden público y social, la seguridad y los derechos de terceros.

Finalmente, estableció que expresión "*salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor*" contenida en el artículo 54 de la Ley 1801 de 2016 no viola el artículo 37, pues respeta el principio de legalidad y es irrazonable exigirle al Legislador que prevea todas las circunstancias que pueden suceder en una ciudad que harían imposible el uso de las vías públicas. Sin embargo, la protección a los derechos a la reunión y a la manifestación en espacios públicos exige que se motive la negativa al uso de las vías públicas, para que no se presenten restricciones desproporcionadas o arbitrarias al ejercicio del derecho.

En el presente proceso, no participaron del debate la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger por habersele aceptado un impedimento y el magistrado Carlos Bernal Pulido por encontrarse en comisión.

EL EXCESO DE BASE MÍNIMA PRESUNTA EN QUE HAYAN INCURRIDO LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE), PODRÁ COMPENSARSE PARA LOS AÑOS GRAVABLES 2013 Y 2014, ACORDE CON EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA VERTICAL